

INFORMARTIVO DE RELATORIA

MARZO 2024

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez (E)	Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-05318-01 Sentencia del 22 de febrero de 2024
<p>La Sección confirmó fallo de tutela mediante el cual se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante dejando sin efecto sentencia proferida por la sección tercera, subsección c del Consejo de Estado, que, en segunda instancia, declaró la caducidad de la acción de reparación directa interpuesta contra la Rama Judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores.</p> <p>El asunto versa sobre la expedición de un pasaporte para que un menor de edad huérfano saliera del país, con base en una autorización aparentemente falsa de un juez de menores. El menor fue enviado a Estados Unidos, nacionalizado y adoptado por una pareja estadounidense que lo sometió a constantes abusos sexuales, físicos y psicológicos por más de 11 años, llevando a que un juez federal lo declarara discapacitado e incapaz de trabajar.</p> <p>En 2013, el ahora adulto solicitó al Ministerio información sobre los documentos que sustentaron la expedición de su pasaporte, recibiendo dos oficios que adjuntaron algunos soportes, pero sin la providencia judicial. Demandó por reparación directa y el Tribunal Administrativo acogió parcialmente sus pretensiones, pero en segunda instancia se revocó la decisión y se declaró la caducidad del medio de control.</p> <p>La discusión gira en torno al momento a partir del cual se debía calcular la caducidad, pues el segundo oficio del Ministerio de julio de 2013 complementó la información, lo que no fue evaluado por la autoridad judicial, vulnerando así el derecho de acceso a la justicia del demandante dadas las excepcionales circunstancias de su caso.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil	Acción de Tutela 17001-23-33-000-2023-00224-01 Sentencia del 15 de febrero de 2024
<p>La Sección confirmó parcialmente sentencia de tutela dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante en trámite de proceso de repetición.</p> <p>Se presentaron irregularidades en el emplazamiento del auto admisorio de la demanda de repetición debido a que, la publicación del edicto se realizó con</p>	

información errada que no correspondía al proceso y en un día diferente al establecido en la norma procesal, afectando gravemente los derechos de contradicción y defensa de la parte demandada.

Consideró la sección que, la falta de cumplimiento de los requisitos legales para el emplazamiento se tipifica como una causal de nulidad establecida en el artículo 133 del CGP. Por lo tanto, se declaró la nulidad de lo actuado hasta ese momento y ordenó la remisión del auto admisorio y traslado a la demandada para que presentara contestación y participara en el resto de la actuación procesal.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera C.P. Hernando Sánchez Sánchez	Acción Popular 050012333000202200819-01 Sentencia del 1 de febrero de 2024
<p>La Sección confirmó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la vulneración de los derechos e intereses colectivos a la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; así como la orden de adopción de medidas para garantizar la prestación del servicio de salud en el corregimiento La Sierra del municipio de Puerto Nare, Antioquia.</p> <p>Consideró la Sala, que está probado que el Centro de Salud del Corregimiento La Sierra está habilitado para prestar diversos servicios, pero no los brinda todos, en tanto no tiene farmacia, ni odontología y solo cuenta con un médico; y la cabecera municipal se encuentra a una distancia de 23 kilómetros en una vía sin pavimentar, por lo que se deben recorrer un tiempo de 45 kilómetros.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sala Especial de Decisión No. 7 C.P. Martín Bermúdez Muñoz	Recurso Extraordinario de Revisión 11001-03-15-000-2024-00293-00 Auto del 8 de febrero de 2024
<p>La Sala al resolver sobre la admisión del recurso extraordinario de revisión con ocasión de una sanción disciplinaria impuesta, consideró que, no se puede invocar la excepción de inconstitucionalidad o inconvencionalidad para negar el trámite del recurso extraordinario de revisión contra decisiones disciplinarias que imponen sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios elegidos popularmente.</p>	

Indicó la Sala que, la excepción de inconstitucionalidad tiene un alcance limitado y no permite que el juez ejerza un control abstracto de constitucionalidad, función exclusiva de la Corte Constitucional.

Consideró que la excepción de inconvencionalidad tampoco procede, pues la Corte Constitucional ya analizó la Ley 2094 de 2021 respecto a su conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos en la sentencia C-030 de 2023.

Que invocar nuevamente los artículos 8 y 23 de la CADH para desconocer el trámite del recurso de revisión implica pronunciarse sobre un argumento ya resuelto por la Corte Constitucional, lo cual excede las funciones del Consejo de Estado.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado</p> <p>Sala de lo Contencioso Administrativo</p> <p>Sección Tercera</p> <p>Subsección C</p> <p>C.P. Nicolás Yepes Corrales</p>	<p>Reparación Directa</p> <p>2000123310002011003640 (57911)</p> <p>Sentencia del 4 de diciembre de 2023</p>
<p>La Sala resolvió grado jurisdiccional de consulta, revocó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que accedió parcialmente pretensiones de la demanda por muerte en accidente de tránsito, y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.</p> <p>Consideró la Subsección que el municipio de Valledupar incurrió en una falla del servicio al no tener la señal "SR-01.- PARE" en una intersección, pero que, se probó que la velocidad a la que transitaba la víctima era inadecuada, superior a los 30 kilómetros por hora, y no le permitió esquivar el furgón contra el que colisionó. Que el impacto lo ocasionó el conductor de la motocicleta contra la parte posterior del furgón; es decir, se demuestra que este último vehículo arribó primero a la bocacalle.</p> <p>Advirtió que la muerte de la víctima no es imputable a la Administración por ausencia de señalización, sino únicamente a la imprudencia de la propia víctima, por conducir a una velocidad inadecuada en la intersección vial.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Juan Carlos Cortés González	Sentencia T-420 del 18 de octubre de 2023
<p>La Sala Segunda de Revisión estudió una tutela de una ciudadana embarazada cuyo empleador terminó el contrato de prestación de servicios pese a haber informado su embarazo.</p> <p>La Sala amparó sus derechos a estabilidad laboral reforzada, seguridad social, igualdad y mínimo vital, vulnerados por la empresa al terminar el contrato sin considerar su embarazo, del cual tenía conocimiento vía WhatsApp, y sin acudir al inspector de trabajo.</p> <p>Así, revocó decisión de instancia y le ordenó a la demandada pagar i) salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta inscripción de trámite liquidatorio, ii) indemnización por despido y iii) licencia de maternidad, conforme al Código Sustantivo del Trabajo, en caso de no haber sido cancelada por alguna EPS.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Natalia Ángel Cabo	Sentencia T-472 del 9 de noviembre de 2023
<p>La Sala Primera de Revisión amparó los derechos a la dignidad y unidad familiar de una persona privada de la libertad con un tumor cerebral cancerígeno y vida corta, quien había pedido el traslado a una cárcel cercana a su familia y la libertad condicional, pero se le negó por no acreditar enfermedad grave incompatible con la reclusión.</p> <p>La Corte reiteró que existe un estado de cosas inconstitucional que da trato indigno a los privados de libertad. En ese contexto, los jueces deben actuar de forma inmediata para detener los efectos inhumanos del actual funcionamiento carcelario.</p> <p>La Corte reconoció el derecho de las personas a estar acompañadas al momento de la muerte como garantía de dignidad humana, para socializar emociones y dar significado a la vida y ese momento.</p> <p>El Alto Tribunal encontró desproporcionado negarle al accionante estar cerca de su familia antes de morir aduciendo peligro, cuando tiene graves dolores, por lo que ordenó a Medicina Legal reevaluar la gravedad de su enfermedad, analizando la compatibilidad con la reclusión, y que el juzgado de ejecución de penas estudie nuevamente otorgarle la prisión domiciliaria.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Natalia Ángel Cabo	Sentencia T-472 del 9 de noviembre de 2023
<p>La Sala Primera de Revisión amparó los derechos a la dignidad y unidad familiar de una persona privada de la libertad con un tumor cerebral cancerígeno y vida corta, quien había pedido el traslado a una cárcel cercana a su familia y la libertad condicional, pero se le negó por no acreditar enfermedad grave incompatible con la reclusión.</p> <p>La Corte reiteró que existe un estado de cosas inconstitucional que da trato indigno a los privados de libertad. En ese contexto, los jueces deben actuar de forma inmediata para detener los efectos inhumanos del actual funcionamiento carcelario.</p> <p>La Sala reconoció el derecho de las personas a estar acompañadas al momento de la muerte como garantía de dignidad humana, para socializar emociones y dar significado a la vida en ese momento.</p> <p>El Alto Tribunal encontró desproporcionado negarle al accionante estar cerca de su familia antes de morir aduciendo peligro, cuando tiene graves dolores, por lo que ordenó a Medicina Legal reevaluar la gravedad de su enfermedad, analizando la compatibilidad con la reclusión, y que el juzgado de ejecución de penas estudie nuevamente otorgarle la prisión domiciliaria.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. José Fernando Reyes Cuartas	Sentencia T-011 del 25 de enero de 2024
<p>La Sala Novena de Revisión amparó los derechos a la salud y vida digna de Genaro, un paciente venezolano con VIH, a quien la Nueva EPS le negó el servicio de salud al desafiliarlo por carecer supuestamente de documento válido y mora en aportes.</p> <p>La Corte consideró que la EPS vulneró la continuidad y el derecho al diagnóstico al interrumpir el tratamiento antirretroviral a una persona en debilidad manifiesta y que interrumpir la prescripción médica a pacientes con VIH, por barreras administrativas o económicas, vulnera su derecho a la salud.</p> <p>La Corte ordenó a la EPS restablecer la atención médica de Genaro y su tratamiento antirretroviral hasta definir su afiliación al sistema de salud e instó a Genaro realizar los trámites para ser encuestado por Sisbén y trasladarse al régimen subsidiado si no tiene capacidad de pago contributivo.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Juan Carlos Cortés González	Sentencia T-061 del 28 de febrero de 2024
<p>La Sala Segunda de Revisión analizó una tutela por un activista LGBTQ+ contra Luis Villa "Westcol" por realizar en YouTube una publicación con mensajes de odio contra esa comunidad.</p> <p>Aunque la Sala declaró carencia actual de objeto por daño consumado al mantenerse publicado el video por más de un año y porque YouTube en sede de revisión eliminó el video; determinó que la publicación constituyó discurso discriminatorio y de odio contra el accionante y población LGBTQ+, específicamente transgénero, que no se le garantizó al accionante mecanismo oportuno y eficaz en YouTube para tramitar reclamos y que las disculpas de Westcol no fueron suficientes para proteger y reivindicar derechos LGBTQ+ y transgénero.</p> <p>La Corte le ordenó Westcol publicar la sentencia, informar sobre impactos negativos de discursos discriminatorios, y capacitarse en derechos LGBTQ+. Adicionalmente previno a Google garantizar en YouTube trámite oportuno para denuncias sobre discursos prohibidos, conforme a la Constitución, DDHH y lineamientos de la plataforma.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Vladimir Fernández Andrade	Sentencia T-066 del 4 de marzo de 2024
<p>La Sala Cuarta de Revisión confirmó parcialmente las decisiones que concedieron el amparo del derecho de petición, puesto que el Ministerio de Defensa no entregó información completa sobre la fecha aproximada de pago de una sentencia a favor de la ciudadana.</p> <p>La Corte reiteró que las entidades deben informar la fecha probable de atención y pago de las obligaciones, conforme a la regulación aplicable y que es imperativo brindar una fecha aproximada derivada del cálculo originado en el sistema de turnos y reglas de cumplimiento efectivo.</p> <p>En este caso, la Corte ordenó al Ministerio de Defensa dar una respuesta de fondo, clara y precisa sobre la fecha aproximada de cumplimiento del crédito a favor de la accionante.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia SU-081 de 2024 Comunicado No. 10
<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional concedió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia a los demandantes por sentencia del Consejo de Estado revocó fallo y negó las pretensiones de demanda que pretendía la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por las graves violaciones a los derechos humanos que significó el homicidio del entonces concejal Julio César Peñaloza Sánchez, en el atentado perpetrado en contra del candidato presidencial Luis Carlos Galán Restrepo.</p> <p>La decisión del Consejo de Estado concluyó que el patrimonio autónomo "PAP Fiduprevisora" representado por la Fiduprevisora debía responder por las obligaciones no trasladadas del DAS en nuevos procesos tras su extinción. Determinó que la Policía no debe responder por hechos del DAS antes de su supresión. Al no convocar a ese patrimonio autónomo, faltó legitimación y negó pretensiones por ese argumento procesal.</p> <p>La Corte revocó la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, para que en su lugar el juez integre adecuadamente la contradicción, incluyendo como mínimo a la Policía Nacional, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Fiduciaria La Previsora S.A. representando al patrimonio autónomo del extinto DAS, además de cualquier otra entidad que deba reparar el daño. Después de esta etapa, dentro de los plazos legales, debe dictar sentencia de segunda instancia resolviendo las apelaciones, sin desconocer la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, definiendo los conceptos a reparar, los obligados a hacerlo y la tasación de los perjuicios.</p>	